



71

**INFORME
AL
PLENO NACIONAL**

celebrado en agosto de 1971
en Algarrobo, presentado por
el Secretario General, camarada

Carlos Altamirano

PARTIDO SOCIALISTA

**INFORME
AL
PLENO NACIONAL**

celebrado en agosto de 1971
en Algarrobo, presentado por
el Secretario General, camarada

Carlos Altamirano

PARTIDO SOCIALISTA

Este pleno del Partido se convoca en circunstancias particularmente difíciles. Se va a cumplir un año desde el histórico triunfo del 4 de septiembre. Desde entonces acá se ha ido dando cumplimiento al programa de la Unidad Popular. Muchas de las cuarenta medidas prometidas en la campaña presidencial ya son una realidad; numerosos puntos del programa se han logrado. Sin embargo, queda mucho por hacer. Mejor dicho queda por hacer lo más: la revolución que entregue el poder efectivamente a los trabajadores chilenos.

Para el debido ordenamiento de las materias, voy a referirme en primer lugar a los logros obtenidos por este Gobierno tanto en la política nacional, como en política internacional. En segundo lugar, a los problemas específicos que deberemos enfrentar, en los distintos campos de la actividad económica y financiera del país. En tercer lugar, daremos a conocer la posición de nuestra colectividad frente a lo que ya se ha hecho y a lo mucho que queda por hacer. En último lugar, me he de referir a la situación orgánica del Partido, a las tareas cumplidas por la actual dirección y a los objetivos que nos hemos propuesto para el futuro.

OBJETIVOS ECONOMICOS Y POLITICOS YA LOGRADOS

Reactivación de la Economía

La primera tarea del Gobierno, ha sido reactivar la economía, gravemente deteriorada durante los últimos años de la pasada Administración. Como es de conocimiento público, durante los tres últimos años del Gobierno de Frei, la tasa de crecimiento del producto fue, en promedio, de

poco más del 1%: la más baja tasa de crecimiento de todos los países de América latina exceptuando a Haití y Uruguay. Esta situación de carácter general se agravó notablemente después del triunfo del compañero Allende. El señor Frei y la derecha hicieron esfuerzos inimaginables por arrastrar al país a un colapso económico que sirviera de fundamento al golpe militar. Su acción se vio frustrada por el asesinato del Jefe del Ejército, General Schneider. Pero los efectos económicos se hicieron sentir: la producción prácticamente se paralizó; la cesantía aumentó notablemente; se produjo una verdadera corrida de los depósitos bancarios y de los depósitos de las asociaciones de ahorros y préstamos; salieron del país sobre treinta millones de dólares y, tanto en la actividad industrial como en la agrícola, se creó un verdadero pánico. El Gobierno Popular logró superar esta gravísima crisis y actualmente podemos afirmar que la producción, especialmente la industrial, ha experimentado un notable crecimiento. El ritmo inflacionario ha sido contenido en forma tal que, en lo que lleva corrido el presente año, el índice del costo de la vida sólo alcanza a menos de la mitad del año pasado, de 26,3% descendió a 11,5%; la cesantía se ha reabsorbido en forma importante, alcanzando la más baja tasa de los últimos diez años: de 8,2% bajó a 5,2%; el poder adquisitivo de las masas ha experimentado un extraordinario aumento, no sólo por un reajuste promedio muy superior del alza del costo de vida, especialmente evidente en el sector privado, sino también por la contención del proceso inflacionario. Se han efectuado avances importantísimos en la ampliación del área social. El carbón, el hierro y el salitre han pasado a propiedad exclusiva del Estado. Gran parte de los bancos se han incorporado al área social. Los cuatro mayores imperios textiles han sido requisados. Hasta la fecha se han expropiado 1.141 predios con una cabida de 2 millones 163 mil hectáreas. El Gobierno dispone de los instrumentos legales necesarios para nacionalizar el cobre de la gran minería. Los trabajadores tienen activa participación en todos los niveles del Gobierno Popular, tanto en la administración pública, como en las empresas socializadas.

Por fin Chile ha reivindicado el derecho soberano a diri-

gir y escoger su propia política internacional. Y en tal virtud ha restablecido las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, con la RDA y con China Popular. Ha establecido relaciones comerciales con la República Popular Democrática de Corea y con Vietnam. Ha dado a conocer con entera franqueza su posición en los organismos internacionales de carácter político, como ser la OEA y en los económicos, como es el Fondo Monetario Internacional. Ha logrado éxitos extraordinarios al disipar toda actitud sospechosa frente a nuestro país de parte de los países limítrofes. Aún más, mantenemos magníficas relaciones diplomáticas con Argentina y Perú y en general con los países del área andina y esperamos a corto plazo restablecerlas con la hermana República de Bolivia. La misión política comercial al mundo socialista, encabezada por el compañero Ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda, ha constituido un éxito absoluto al lograr no sólo el apoyo y solaridad del mundo socialista, sino también el otorgamiento de créditos para proyectos específicos por valor de 300 millones de dólares, y de créditos comerciales por valor de 140 millones de dólares, esto es 440 millones de dólares sin considerar a China Popular y a Corea, quienes han manifestado su firme decisión de apoyar política y económicamente al Gobierno chileno y a la revolución popular. El Presidente de la República ha celebrado una entrevista con el Presidente de Argentina, en busca de una solución definitiva a viejos diferendos limítrofes que han obstaculizado las relaciones amistosas entre ambos pueblos. Tal visita constituye un hecho histórico en la ruta de la fraternidad americana. Igual éxito pensamos se obtendrá en las conversaciones para restablecer las relaciones con Bolivia y por último, para acrecentarlas con el gobierno progresista del Perú y de los demás países que integran el Pacto Andino.

LO QUE AUN RESTA POR HACER

A pesar de lo dicho, queda mucho por hacer; además, existen dificultades serias de orden económico y político que atentan en contra del desarrollo progresivo del proceso re-

volucionario. Trataremos de enumerar cuáles son los problemas económicos, administrativos, institucionales y políticos de mayor significación.

Problemas Económicos

Existe en este instante un desajuste evidente entre producción y consumo. Si bien es cierto que, como lo hemos dicho, la producción industrial, minera y agraria ha aumentado en porcentajes significativos, la demanda ha crecido en proporción aún mayor. Este es un problema grave; y a la larga, de no solucionarse, necesariamente se expresaría en una reactivación del proceso inflacionario. Además, el crecimiento extraordinario del consumo se ha realizado a expensas de la inversión. Como todos saben, la elevación efectiva del nivel de vida de la población de un país sólo puede lograrse a través del aumento sustancial de la producción y ésta no puede lograrse si, a su vez, no se realiza un gran esfuerzo por aumentar la tasa de inversión. Transitoriamente se ha ocupado la capacidad industrial instalada. Pero a la larga es decisivo ampliar esta capacidad instalada, para lo cual es necesaria una mayor inversión. El 70% de la inversión la hace en Chile el sector público. Sólo el 30% de ella la efectúa el sector privado. Ahora más que nunca debemos aumentar la inversión pública. Para esto es necesario desviar parte de los recursos que se emplean en consumo a inversión.

Desajuste del Aparato Administrativo

Este es ineficiente e irracional y lógicamente no ha sido concebido para llevar a cabo una política de planificación socialista. Esto es sin contar las numerosas dificultades existentes, debido a que sectores significativos de la administración pública no participan de la política revolucionaria del Gobierno saboteando su acción. En términos generales, todos los organismos de la administración pública adolecen de un alto grado de irracionalidad. Es muy difícil, por no decir imposible con los actuales mecanismos, darle a la acción del Gobierno, en sus diferentes campos, una conduc-

ción centralizada y planificada. Especialmente esto es cierto en el área económico-financiera y en los Ministerios de Agricultura y de Vivienda.

Problema Institucional

Creemos innecesario llamar la atención sobre los gravísimos problemas que presenta el hecho de que la revolución chilena deba, en su quehacer, ceñirse a los estrechos cauces de la actual institucionalidad democrático-burguesa. No sólo el Poder Ejecutivo, como hemos visto, no dispone de los mecanismos necesarios para centralizar sus decisiones, para planificar la economía, para darle coherencia a su acción, sino que a mayor abundamiento cuenta con un Parlamento obstruccionista y un Poder Judicial, expresado en la Corte Suprema, absolutamente reaccionario y contrario a toda idea de cambio.

Problema Político

Por último, tampoco hemos logrado encontrar mecanismos más efectivos de participación de los trabajadores, tanto en el nivel de la administración pública, como en las empresas socializadas. Muchos de los problemas actualmente existentes en el campo, en las explotaciones mineras y en la industria, se deben a esta falla. La falta de compromiso real del trabajador campesino, minero u obrero con el área reformada del campo, con la mina nacionalizada o con la industria y la banca estatizada, se debe a que no se siente actor y participe real de este proceso de construcción de una nueva sociedad. Todo verdadero cambio social ha sido siempre producto de la acción directa de las masas, quienes en su lucha incesante por modificar sus niveles de vida y por construir una sociedad más justa, logran modificar las relaciones de fuerza existentes en una sociedad dada.

El paternalismo burocrático no conduce a un auténtico proceso revolucionario y, por el contrario, lleva a la despolitización de las masas; por esto no bastaría socializar todos los medios de producción. De conseguir tal objetivo,

cuando más habríamos establecido un capitalismo de estado y nosotros no estamos luchando por construir un capitalismo burocrático estatal. Para edificar la sociedad socialista es imprescindible contar con la participación directa, mayoritaria y real de los obreros y de los campesinos en todas las etapas del proceso de transición de la sociedad capitalista a la sociedad socialista y en todos los niveles de la acción política administrativa y económica de la Nación. Es fundamental dar vida a la constitución de un auténtico Poder Popular. Y este poder de obreros y campesinos no se instituye por un acto supremo de Gobierno. No se establece burocráticamente desde arriba. Sólo puede lograrse desde abajo a través de la acción y de las luchas de las masas.

Sólo las reformas que provienen de la acción de las masas tienen potencialidad revolucionaria. Las reformas estructurales o superestructurales impuestas por la administración central tenderán inevitablemente a deformar el proceso revolucionario y concluirán por convertir al Gobierno en un Gobierno reformista, burocrático y paternalista.

Repetimos, toda reforma lograda en la ampliación del área social, en las transformaciones del aparato administrativo y en la modificación de la institucionalidad burguesa, para tener verdadero carácter revolucionario necesita ser la consecuencia orgánica de una acción de los trabajadores. De una movilización de las masas.

Pero también debemos dejar en claro que la radicalización política del proceso no podrá ser el resultado de la acción espontánea de los trabajadores del campo y de la ciudad. Por esto nos hemos pronunciado categóricamente en contra de las concepciones espontaneistas de las masas. Hemos condenado las tomas indiscriminadas de sitios urbanos, de predios agrícolas, de fábricas, minas y edificios públicos o privados.

Los partidos revolucionarios tienen como imperativo superior darle a la acción de las masas un objetivo estratégico, una gran bandera de lucha, cual es la conquista del "poder pleno" para crear una nueva sociedad.

Debe quedar en claro para la clase trabajadora, que lo que está en disputa en la hora presente, no son reivindicaciones

relativamente subalternas de carácter económico o mejoras parciales en la estructura institucional del país. Como ya lo expresara en un Pleno pasado el compañero Rolando Calderón: "El gran pliego de peticiones de la clase proletaria chilena debe ser la conquista de "todo el poder".

En las empresas socializadas ha sido posible observar importantes modificaciones en la conducta de los trabajadores. Por eso, para nosotros, primero está ganar la "Batalla por la Socialización". Esto es, por la ampliación del área social, para de inmediato y casi paralelo a ello, desarrollar entre los obreros y los campesinos una conciencia tal que impulse la "batalla por la producción".

Pero así como en más de algún sector de la actividad económica se ha logrado elevar el nivel de conciencia política de los trabajadores, hay otros donde aún se piensa que las nuevas empresas socializadas son sinónimo de desorden, anarquía, ausentismo y falta de autoridad.

Debemos educar políticamente a la clase trabajadora, enfrentándola a situaciones concretas y específicas que le permitan entender la necesidad de incorporarse disciplinadamente a la "batalla por la socialización" y, consecuentemente, a la "batalla de la producción". En la medida en que el Gobierno y nosotros cumplamos con los trabajadores y avancemos resueltamente en el proceso de socialización, el Gobierno tiene el derecho a exigir más responsabilidad y mayor producción. De aquí que pensemos que es preciso avanzar más aceleradamente en la construcción del área de propiedad social. Hay varias razones políticas y económicas para ello.

- 1.— Un área de propiedad social dominante permite implantar un sistema intensivo de planificación.
- 2.— Un área de propiedad social dominante modifica cualitativamente el funcionamiento del sistema económico. Por ejemplo, el sistema bancario socializado y conducido con una perspectiva diferente otorga una nueva dimensión a todo el proceso financiero y de acumulación de recursos.
- 3.— Un área de propiedad social debe constituirse como un

todo orgánico, íntimamente relacionado. En otras palabras, el área social tiene una dimensión mínima para que sea instrumento eficaz de planificación y de inversión.

- 4.— Un área de propiedad social plantea una perspectiva más fructífera en materia de inversión. Dispondremos de más recursos para invertir y los podremos asignar y orientar, según pautas determinadas, por un sistema racional de planificación.

En los últimos años la inversión pública directa o indirecta alcanzó aproximadamente a un 70% de la inversión total del país. En cambio, la inversión privada ha venido disminuyendo cada vez más. Por esta razón los empresarios privados no pueden hoy día ampararse en los manoseados conceptos de "incertidumbre" o "inseguridad" para negarse a invertir y producir más, puesto que con la "certidumbre y seguridad" garantizadas por los gobiernos de los señores Alessandri y Frei, el inversionista del sector privado tampoco elevó el porcentaje de inversión. La escasa inversión del sector privado obedece a una conducta tradicional de profundas raíces sociológicas, ya descrita en el famoso libro de Francisco Encina "Nuestra Inferioridad Económica".

En consecuencia, la disminución de la inversión privada no es un argumento contra la socialización de una mayor área productiva. La inversión en Chile ha sido del orden del 15% del producto bruto. De este 15%, sólo un 4,5% comprende la inversión privada. Si el sector público sólo mantuviera y no acrecentara los niveles anteriores de inversión, tendríamos por lo menos asegurado un 11,5%.

Obligatoriamente debemos aumentar estos porcentajes. Tenemos que llegar a una tasa superior al 25%. Esta cifra es clave en el proceso de la construcción del socialismo.

Como puede observarse, la política económica del Gobierno apunta en dos direcciones aparentemente contradictorias: por una parte se propone la transformación de la estructura económica chilena, la modificación de las relaciones de producción y la ruptura de la dependencia del imperialismo; por otra, el mejoramiento del nivel de vida de

los trabajadores, una severa política distributiva, la ocupación plena y un aumento sustancial de la producción.

Esta política al plantearse "simultáneamente" el cumplimiento de dos objetivos de la mayor trascendencia, cual es la transformación revolucionaria de nuestra economía y el mejoramiento del estándar de vida de las masas, crea, indudablemente, dificultades muy serias.

El objetivo central propuesto consiste en compatibilizar las metas señaladas: profundizar las transformaciones revolucionarias sin que ello signifique graves sacrificios para la población.

Por eso hemos planteado como tarea insoslayable de los trabajadores la "batalla por la producción", porque la "batalla por la producción" es el complemento indispensable de la "batalla por la socialización". Cada nueva empresa socializada debe ser ejemplo de eficiencia, de disciplina laboral, de mejoramiento de la productividad.

De lo anterior se colige que para nosotros, siendo la "batalla por la producción" una meta esencial, es sin embargo, un complemento en el gran objetivo estratégico, cual es la "batalla por la socialización".

NUESTRA RESPUESTA FRENTE A LOS PROBLEMAS DE DESAJUSTES

Desajuste de Producción, Consumo e Inversión

Es fundamental definir con mayor precisión la política de precios. Gran parte de ella está basada en subsidios estatales a las empresas productoras de carbón, acero, electricidad, movilización, etc. Tal política de precios no puede mantenerse indefinidamente. Ella ya está siendo rectificadora, de manera que los sectores de más altos ingresos no se beneficien por igual de una política de precios bajos, destinada a elevar el nivel de vida de los grupos más modestos de la población.

Pero también será fundamental encarar, para el próximo año, una política de remuneraciones que no permita, como ocurrió este año, se produzca una inmensa desproporción entre lo que se dio al sector público y lo que han

recibido ciertos sectores de trabajadores del sector privado, lo cual excede en promedio a más del 55%. La política de remuneraciones deberá ser encarada con gran audacia y energía, de lo contrario, será imposible mantener un nivel de precios compatible con un manejo adecuado del sistema financiero. Conjuntamente con la política de precios y la política de reajuste de remuneraciones, se está programando una política de abastecimientos para evitar lo que ya está sucediendo, cual es el desequilibrio entre oferta y demanda en cierto tipo de mercaderías. Pero como se ha dicho y repetido en el curso de este informe, este desabastecimiento no se debe, como lo sostienen los sectores reaccionarios, a la desorganización y disminución de la producción, sino a un extraordinario incremento del consumo, debido al aumento del poder adquisitivo. Este grave desajuste entre producción y consumo nos obligará a aumentar considerablemente la importación de artículos alimenticios y de ciertas materias primas.

Pero como se comprenderá, esta solución es sólo parcial y transitoria. También se está estudiando una política para centralizar las operaciones de comercio exterior y para darle coherencia a la política de comercio internacional.

En este sentido debemos dejar en claro que también son absolutamente falsas las afirmaciones del sector reaccionario, en orden a que se habrían despilfarrado las reservas en moneda extranjera existentes al final del Gobierno anterior, que eran del orden de los 400 millones de dólares. La verdad es que estas reservas han disminuído en una cifra aproximada a los 200 millones de dólares. Pero ello se ha debido no sólo a la falta de cumplimiento del pago de los dividendos que corresponde a las empresas monopolistas del cobre, y que asciende aproximadamente a 80 millones de dólares, sino también a que Chile no ha hecho uso de créditos en moneda extranjera, como viene ocurriendo desde hace ya una década. En resumen, no se ha dispuesto de mayores créditos, las empresas yanquis no han pagado los dividendos que corresponden a las utilidades percibidas el año 1970 y parte del año 1971, el precio del cobre ha descendido, y por último, Chile ha continuado cumpliendo cabalmente sus compromisos en moneda extranjera. Por

estas razones, no es imputable al Gobierno Popular el gasto de parte de estas reservas, pero cualesquiera sean las razones que nos asistan, el hecho concreto, por una parte, es que no hay expectativas de poder disponer de mayores créditos en dólares, y por otra, indudablemente el aumento del consumo presionará sobre la balanza de pagos, obligándonos a importar el próximo año, en artículos alimenticios sobre 100 millones de dólares, más de los 200 millones que tradicionalmente importamos. Toda la situación anterior configura un cuadro que, sin ser catastrófico, ni mucho menos, obliga al Gobierno a mantener una política muy cuidadosa en materia de importaciones, además en el nivel interno nos exige, conjuntamente con elevar la productividad, reducir el consumo desmesurado de los sectores altos y también medios de la población. La política de precios, de remuneraciones, de abastecimiento y de comercio exterior, debe ser complementada con una política adecuada de créditos y todas ellas enmarcarse dentro de las posibilidades concretas del presupuesto en moneda nacional para el año 1972 y del presupuesto en moneda extranjera para este mismo año.

Pensamos que la elaboración de estas políticas facilitará la acción del Gobierno y permitirá evitar los desajustes en la estructura económica y financiera a que hemos hecho mención.

Pero también es necesario tener presente que esta nueva política exigirá una mayor disciplina en el campo laboral y limitaciones muy estrictas para el consumo de los sectores de altos ingresos.

Desajuste de Orden Administrativo

Los desajustes del aparato administrativo, obligarán a una revisión completa de la administración pública. Lo anterior nos ha llevado a plantear la necesidad de que el Gobierno solicite del Congreso Nacional una delegación de facultades para reformar la Administración Pública. Adecuándola a las nuevas urgencias de una nueva economía y de un nuevo estado.

Una administración pública concebida para servir a los

sectores mayoritarios de la Nación, dotada de los mecanismos legales necesarios para planificar la economía y con la posibilidad de dar cabida en la dirección de las diferentes instituciones a los trabajadores, constituye un paso necesario insoslayable.

Desajustes Institucionales

El Partido Socialista ha venido exigiendo con majadera insistencia la urgencia en proponer reformas a nuestra Carta Fundamental, no sólo para poder nacionalizar el cobre, como ya se hizo, sino también para modificar la composición, estructura y facultades del Congreso Nacional y de la Corte Suprema, así como para hacer posible la nacionalización de los monopolios y grandes empresas industriales, financieras y comerciales, como por último para darle rango constitucional a la participación de obreros y campesinos en la dirección del Estado.

Como se sabe, la actual Constitución Política, aprobada el año 1925, se inspiró en una concepción liberal basada en la división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su estructura se basa fundamentalmente en una concepción formalista de la democracia y parte del supuesto de que la soberanía nacional reside en la Nación, en circunstancias de que la posibilidad real que el pueblo participe en la dirección del Estado, es prácticamente nula.

La propia candidatura presidencial del señor Tomić postulaba "la construcción de un nuevo Estado, democrático y moderno". Y el gobierno del señor Frei, también planteó numerosas modificaciones a la Carta Fundamental, entre ellas la facultad de otorgar al Presidente de la República poder para disolver por una vez el Congreso Nacional.

Precisamente este es el caso. Nosotros, socialistas, cuestionamos el sistema institucional chileno, especialmente la composición y funciones del Congreso Nacional. El no representa la mayoría nacional desde el instante mismo en que, en la pasada elección municipal, las fuerzas que conforman la Unidad Popular obtuvieron más del 50% de los votos. Este hecho se ve confirmado por la última elección complementaria en Valparaíso, donde el compañero Hernán

del Canto, no sólo obtuvo una votación que vino a ratificar el espectacular crecimiento de las fuerzas de la Unidad Popular, sino que también mejoramos levemente el porcentaje de votos. Pero hay aún más. La Democracia Cristiana se ha dividido. Ganaron un diputado, pero perdieron 8. Lo mejor de sus cuadros juveniles, campesinos y políticos han emigrado de esa tienda. En consecuencia, dicha colectividad, no es ya la primera fuerza política del país, sino que lo es el Partido Socialista, quien obtuvo en la pasada elección municipal, un 3% menos de votos que el Partido Demócrata Cristiano. Cualesquiera sean las fuerzas de la Izquierda Cristiana, ésta indudablemente representa más del 3% de la votación democratacristiana. Sin embargo, la Democracia Cristiana tiene 20 senadores y el Partido Socialista 5. Esta cifra revela hasta qué punto es arbitraria la representación de las fuerzas políticas en el Senado de la República, y ella, lógicamente, le resta toda legitimidad a las decisiones de esta rama del Congreso. Somos la primera fuerza política del país. Aún más, la Unidad Popular ha visto ampliada su base con la incorporación de la Izquierda Cristiana, lo cual deja en abierta minoría a los sectores plutocráticos y reaccionarios. El Congreso Nacional se alza como un muro de contención frente a las exigencias de cambios, las cuales también deben expresarse en transformaciones en las instituciones jurídicas vigentes. Se ha acusado a gobernadores e intendentes por actos que, de acuerdo con las concepciones liberales y burguesas minoritarias en el país, serían punibles, y ahora se anuncia una nueva acusación constitucional en contra del Ministro de Economía, Pedro Vuskovic. A juicio del Partido Socialista, ni la Cámara de Diputados, ni el Senado, tienen autoridad moral, ni están revestidos de la representatividad necesaria para decidir sobre hechos tan importantes, puesto que sólo son la expresión de una minoría nacional.

En el Programa de la Unidad Popular se dejó expresa constancia del "propósito de transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado, donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder" y en el mismo Programa se deja también testimonio del objetivo de "institucionalizar la incorporación masiva del pue-

blo al poder estatal". Creemos llegado el momento de cumplir con estas metas programáticas fundamentales.

Y es por esto mismo que hemos insistido en la necesidad de proponer una reforma a la Constitución Política, en orden a entregarle al Presidente de la República la facultad para disolver el Congreso Nacional; en segundo lugar, para elegir una Cámara Unica; en tercer lugar, para disponer de las herramientas necesarias para expropiar el latifundio industrial, financiero y comercial, tal cual se hizo con el latifundio agrícola en la Ley de Reforma Agraria y, en cuarto lugar, para establecer constitucionalmente el derecho de los trabajadores de la ciudad y del campo y sus organismos representativos de clase, para participar efectivamente en la conducción del nuevo Estado. Mal podrían rechazar la facultad de disolver el Congreso Nacional partidos de oposición, cuando ya la votaron favorablemente en la Administración pasada. Tampoco puede ser motivo de rechazo la elección de una Cámara Unica, más moderna y ágil, en la cual se establecerían disposiciones que vendrían a ratificar anhelos largamente sentidos por las masas, como son, entre otros, el de intervenir en la designación de los ministros de la Corte Suprema. Como lo hemos dicho una y mil veces, desde que acusáramos constitucionalmente a la Corte Suprema: Esta es una justicia de clases, en este tribunal se refugia el pensamiento más cavernario de nuestro país; dada su modalidad de generación, no permite ser renovada; sus decisiones son contrarias a los trabajadores; sus sentencias han lesionado gravemente el interés de la Nación; su jurisprudencia favorece a los grupos empresariales y latifundistas y atenta contra el derecho de los obreros y campesinos; por otra parte, pensamos que además de continuar utilizando las armas jurídicas previstas en diversos textos legales para impedir el sabotaje a la producción, la paralización injustificada de faenas y el desabastecimiento, debe crearse un mecanismo constitucional que permita al Gobierno Popular, por vía administrativa, expropiar los monopolios, las industrias estratégicas y aquellas que por su gravitación, en ciertos sectores de la economía, influyen en la producción y distribución de mercaderías esenciales para el consumo del pueblo.

De oponerse la precaria y transitoria mayoría parlamentaria a estas modificaciones del texto constitucional, deberá requerirse la decisión de la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada en un plebiscito.

PROBLEMA POLITICO

La realidad política nacional está experimentando profundas convulsiones. La inmensa mayoría de las colectividades políticas, en mayor o menor medida, están sufriendo el impacto de los cambios, producto de la acción revolucionaria del Gobierno Popular. Esta situación era previsible. Desde hace tiempo viene observándose un reajuste de las fuerzas políticas chilenas en función de los problemas más vitales a los cuales debe responderse en esta hora histórica. Estamos en el año de la decisión. No caben las actitudes ambiguas ni hipócritas. No puede sostenerse que se está con la revolución, pero en el hecho, oponerse a todas aquellas decisiones que importen cambios efectivamente revolucionarios. En el Gobierno Popular hay cabida para todas aquellas fuerzas que luchan honestamente por construir una nueva sociedad, por establecer el socialismo. Podremos disentir en las tácticas. Pero en definitiva, lo decisivo, lo esencial es saber si se está con la Revolución o contra la Revolución; con Chile, o con los campesinos, o con los latifundistas; con los grandes empresarios, o con los obreros; si se está en favor de una banca manipulada por cinco o seis familias, o de una banca organizada al servicio de las actividades económicas prioritarias del país.

En un comienzo, este proceso de reordenamiento de las fuerzas políticas chilenas podrá agregar mayor confusión al panorama general de nuestra sociedad. Pero en definitiva es útil e inevitable. La Izquierda Cristiana, en la medida que es consecuente, no podía continuar avalando una política reaccionaria y sediciosa, como ha sido la mantenida por el sector freista de esa colectividad, desde el día mismo que triunfara Salvador Allende. El señor Frei fue el más golpeado por esta victoria. Para él se cumplía el sino fatal que lo ha sindicado como el Kerensky chileno. Nada hizo por evitar el pánico económico y financiero. To-

do lo contrario, lo estimuló a través del discurso del entonces Ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar. No gastó ninguna diligencia para investigar debidamente el crimen del General Schneider.

Diríamos más, fue cómplice, por omisión, de la fuga de varios de los participantes en este atentado en contra del Ejército chileno, y desde entonces hasta hoy, en la propaganda realizada en la elección municipal última, en la persona del candidato elegido para enfrentar al compañero Adonis Sepúlveda en la elección complementaria de la Décima Circunscripción, en la intransigencia parlamentarista opositora; en la batalla por elegir un nuevo Rector de la Universidad de Chile, en la elección complementaria por Valparaíso, en todas estas acciones se impuso la concepción conservadora, y aún más, derechista del grupo que apoya al señor Frei. El 4 de septiembre pasado no sólo fue derrotado por nosotros el señor Tomic, sino que lo que es más grave para él, también fue derrotado en su propio partido, su estrategia de lucha, su concepción del proceso político chileno, sus propósitos de cambios en las estructuras económicas y del Estado; su anhelo, aparentemente sincero, de unirse al pueblo y sumarse a este gran proceso revolucionario. La Democracia Cristiana vendió su alma a Frei y Frei se la vendió a la derecha. Su expectativa presidencial, en torno a la cual gira toda su ambición política, lo conduce inevitable y fatalmente a entregarse maniatado a las fuerzas reaccionarias.

Por esto, porque se está produciendo todo un reagrupamiento de las fuerzas sociales, de acuerdo a las grandes alternativas vigentes en este momento, es porque se hace indispensable entregar una respuesta institucional y política a este inevitable reagrupamiento. Ni siquiera nuestro partido ha escapado a este reordenamiento. Un diputado ha expresado ideas y pensamientos que en su contexto general no son sino las opiniones que a diario vierten los diarios. El Mercurio, La Prensa y los voceros más reaccionarios de la derecha. La verdad es que todos los partidos albergan en su seno tendencias conservadoras, lógicamente estas tendencias son más o menos regresivas, según sean

las clases sociales a quienes representan esas organizaciones.

Nuestra posición frente a los últimos hechos que tan fuertemente han golpeado a diversas colectividades políticas se ha orientado de acuerdo con los siguientes principios básicos:

- 1.— Hemos dado nuestro respaldo a las directivas oficiales del Partido Radical y del Mapu.
- 2.— Hemos formulado votos para que estas colectividades políticas se reunifiquen o se agrupen de acuerdo a posiciones ideológicas consecuentes.
- 3.— Es menester ampliar la base de sustentación del Gobierno Popular con todas las fuerzas nuevas que quieren honestamente contribuir al proceso de cambios por el cual transita nuestra Nación. Básicamente, al decir esto, nos referimos a la Izquierda Cristiana.
- 4.— Se hace necesario hacer un gran esfuerzo para que los partidos, colectividades o grupos que se han dividido o que siendo autónomos, no tienen divergencias ideológicas serias y profundas con otras organizaciones, se integren a ellas para evitar así la dispersión y atomización de las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno.
- 5.— Por último, constituye para nosotros un principio básico el que este reagrupamiento de las colectividades políticas y su posible participación en el Gobierno Popular, se realice definiéndose respecto del desafío vital a que está sometida hoy día la sociedad chilena, esto es con la revolución o contra la revolución.

Como ya lo hemos dicho, no deben dividirnos transitorias diferencias tácticas, relativamente subalternas, en la elaboración de una estrategia final. Podremos discutir estas diferencias; concretamente los socialistas no creemos poseer la verdad absoluta. Aceptamos analizar sin prejuicios, desprovistos de todo dogmatismo, cuáles son las formas más correctas de lucha, cuáles son los procedimientos más adecuados para lograr el objetivo final, cuáles para construir una nueva sociedad y crear un auténtico poder popular.

Consecuentes con estos principios básicos, hemos dado y daremos nuestro apoyo a todos aquellos que están por la revolución. No haremos cuestión de palabras o adjetivos. Cualesquiera sean las expresiones gramaticales que se utilicen, revolución significa destruir el poder de la burguesía, liquidar la sociedad capitalista y construir un estado proletario y socialista.

Podremos demorarnos. En algunos instantes será tal vez necesario hacer un alto en el camino. Pero nada ni nadie nos apartará del objetivo histórico último para el cual nacimos a la vida política y por el cual nuestro Partido ha luchado a lo largo de su existencia, dejando en esta batalla mucho mártir y sacrificando la esperanza legítima de miles de militantes, que durante años han sido postergados y humillados.

La última elección complementaria por Valparaíso, demostró, en el peor caso para la Unidad Popular, que estamos estagnados, que no crecemos. De allí que nuestra estrategia se oriente fundamentalmente a romper este hipotético equilibrio de fuerzas y a utilizar esta ruptura para impulsar el proceso revolucionario hacia niveles más altos de desarrollo político y de movilización de masas. Contribuir, por acción u omisión a mantener este supuesto equilibrio nos perjudicaría gravemente a nosotros. La estrategia de la derecha es esperar y esperar solapadamente, esperar el desgaste del Gobierno Popular, la erosión de su base social. Este desgaste y esta erosión no tienen por qué producirse si actuamos con decisión y a la ofensiva, si invocamos el apoyo de aquellos sectores sociales que estén realmente comprometidos con los cambios. Si llamamos a la juventud chilena a sumarse con alma y vida a esta gran tarea para transformar radicalmente estructuras sociales de hábitos políticos; los valores de vida; a crear una nueva moral revolucionaria.

Si convencemos a sectores de pequeños y medianos propietarios, industriales y comerciantes que no es contra ellos la lucha que libra el Gobierno de Salvador Allende. Si logramos atraer a nuestro lado a la mujer chilena, especialmente a la mujer proletaria y campesina, cuya mentalidad, en gran medida, se encuentra deformada por la propagan-

da tenaz de reaccionarios e imperialistas, quienes han logrado introducir en ellas la imagen de una izquierda, símbolo de terror, inseguridad, caos, anarquía, desorganización y cesantía.

POLITICA DEL PARTIDO SOCIALISTA

La estrategia del Partido frente a la nueva situación económica y social y a los hechos políticos acontecidos, se expresa de manera diferente, según sea el área económico-social de que se trate, pero en líneas generales se manifiesta en la necesidad de endurecer la política del Gobierno. Rehuir el enfrentamiento en los diversos planos de la actividad social y política, desmovilizar las masas, pretender moderar la lucha de clases, constituye un gravísimo error. Será precisamente la lucha ideológica, el ánimo decidido del Gobierno de imponer el programa de la Unidad Popular, de actuar sin contemplaciones con los sectores sediciosos de la reacción, lo que permitirá aglutinar fuerzas, polarizar a los partidarios de los cambios, atraer junto al Gobierno a los que estén sinceramente con la revolución y, finalmente, a evitar que las fuerzas camufladas, bajo un aparente ánimo de colaboración, no estén sino esperando la hora de dar el golpe sedicioso en contra del Gobierno Popular.

POSICION DEL PARTIDO FRENTE A LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS POLITICOS

Elección de Valparaíso

La elección complementaria reciente, sin constituir un éxito, tampoco fue un fracaso. Dimos la lucha en un terreno difícil, donde la derecha y especialmente la Democracia Cristiana, era tradicionalmente fuerte. Ya el año 1958 ganó en la elección presidencial el señor Frei, y en 1970 fue la única provincia donde obtuvo, por escasísimo margen de votos, la primera mayoría el señor Tomic. En la elección municipal última obtuvimos un porcentaje de votos inferior al promedio nacional. A mayor abundamiento, el acto electoral se realizó bajo los efectos negativos producidos por el asesinato del señor Pérez Zujovic; y por último, la cam-

pañá debió suspenderse debido al terremoto que asoló esa y otras provincias de Chile. No enumeramos estos factores para disculpar la derrota, a pesar de todo, debíamos haber ganado. Particularmente, en Valparaíso, se había realizado desde antes del terremoto, un gran trabajo del Gobierno. El propio Presidente de la República estuvo dos meses radicado en esa provincia. El candidato compañero Hernán del Canto cumplió en forma extraordinariamente positiva su papel. En consecuencia, la derrota experimentada por la Unidad Popular en Valparaíso, constituye una voz de advertencia que debemos tener presente. El fortalecimiento del apoyo social al Gobierno no ha continuado con igual ritmo después de la elección municipal; a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, se observa un estagnamiento en la ampliación de la base de apoyo del Gobierno, se constata lo que hemos denominado un "Empate Político" entre Gobierno y oposición. Empate que es necesario romper con una conducta audaz y de ofensiva; sin embargo y no obstante lo negativo de la derrota sufrida.

En esta elección, ella arroja como saldo positivo, en primer término, la consolidación de las fuerzas de la Unidad Popular que abarcan al 50% del electorado; y en segundo lugar, esta elección constituyó la causa desencadenante de la quiebra de la Democracia Cristiana. Ganaron un diputado, pero perdieron ocho parlamentarios, y lo que es más, perdieron la juventud, los mejores cuadros sindicales y los dirigentes más lúcidos y honestos. Una vez más repetimos lo que hemos afirmado anteriormente, la lucha entablada entre las fuerzas revolucionarias y la contrarrevolución por conquistar el poder, hace crujir toda la superestructura, agudiza la lucha de clases, decanta y obliga a definirse a todos los sectores sociales y políticos. En algún momento del desarrollo de este proceso, estas tensiones necesariamente habrán de desembocar en un enfrentamiento de clases.

POSICION DEL PARTIDO ANTE LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL PARTIDO RADICAL

Como también lo expresáramos, nuestro Partido se ha definido por el respaldo a las directivas oficiales de las de-

más colectividades políticas que contribuyeron con su esfuerzo y sacrificio a hacer posible esta alianza, que es la Unidad Popular. Creemos que la actual dirección del Partido Radical está animada de una voluntad muy firme de cumplir el programa del Gobierno del compañero Allende. Sin embargo, también hemos expresado nuestra opinión en orden a hacer los esfuerzos necesarios para reagrupar en un solo partido a los dos sectores hoy disidentes. Ojalá se lograra en el futuro esta meta tan importante para consolidar la base de apoyo del Gobierno.

POSICION DEL PARTIDO CON RESPECTO AL MAPU

Igualmente dimos nuestro apoyo y respaldo al Mapu. No podemos olvidar que ellos junto a los compañeros que renunciaron a esa colectividad, constituyeron la vanguardia del pensamiento cristiano que se decidió en momentos difíciles y en que el porvenir era incierto, a venir a integrar la Unidad Popular y jugarse lealmente por la victoria de Salvador Allende. Por estas razones estimamos, al igual que el compañero Presidente, que era indispensable su permanencia en el Gobierno.

POSICION DEL PARTIDO EN RELACION A LA IZQUIERDA CRISTIANA

Nuestra organización ha visto con profunda satisfacción la decisión de la Izquierda Cristiana, en orden a romper con su partido y a constituirse en un movimiento verdaderamente comprometido con los cambios y resuelto a apoyar las medidas revolucionarias del Gobierno.

Comprendemos que todavía el proceso de decantación dentro de la Democracia Cristiana no ha terminado. Que es posible que en el futuro se sumen más fuerzas a la Izquierda Cristiana, a medida que el sector más reaccionario de la Democracia Cristiana consolide sus posiciones y se transforme en simple departamento electoral de la candidatura presidencial de Eduardo Frei, de la derecha y del imperialismo. Pensamos que este movimiento debe aportar su esfuerzo y su experiencia a la construcción del socialis-

mo. Valoramos ampliamente lo que él significa y estamos seguros que no se constituirá en un factor de freno o de contención del proceso revolucionario.

RELACIONES DEL PARTIDO CON EL PARTIDO COMUNISTA

Creemos innecesario repetir lo que venimos afirmando desde hace ya muchos años: La unidad socialista-comunista es requisito "sine qua non" para llevar adelante el proceso de cambios y esta unidad no sólo debe expresarse en el alto nivel de las comisiones políticas, sino en todos sus estratos, de manera que ella asegure la hegemonía de la clase obrera en el curso revolucionario.

Las actitudes sectarias que existen en ambas colectividades políticas, los afanes de supremacía, a veces legítimos de los dos partidos; el deseo de ganar más adeptos entre obreros y campesinos; debe dar paso a un entendimiento real y profundo, estableciéndose mecanismos y formas de colaboración que permitan, dentro del mutuo respeto a la autodeterminación, asumir una conducta que nos constituya, junto a las demás colectividades de la Unidad Popular, en los actores reales del proceso histórico que vivimos. Nuestra dirección está haciendo los más sinceros esfuerzos por crear las condiciones necesarias, por consolidar y fortalecer la vieja unidad socialista-comunista.

POSICION DEL PARTIDO FRENTE A LA UNIDAD POPULAR

Nuestro Partido ve en la Unidad Popular un instrumento político fundamental en esta etapa del desarrollo. Le atribuimos la mayor importancia y estimamos de nuestro deber fortalecer y ampliar los vínculos que unen a los partidos de la UP.

Por esta razón hemos planteado constantemente la necesidad de revitalizar los CUP y de entregarles nuevas y mayores responsabilidades en orden a constituirse en los guardianes de la revolución chilena en cada centro de trabajo, en cada población, en el campo y en la mina.

Compañeros del Pleno:

Como ustedes podrán haber apreciado, las dificultades que existen para llevar a su cima la revolución chilena son muchas. Aun cuando la situación económica general del país nos es favorable, existen interrogantes serias en el porvenir que urgen una respuesta enérgica y audaz. En el campo político podemos y debemos ganar más fuerza. Dependerá de nosotros mismos. De nuestra capacidad de organización. De la oportunidad y decisión con que adoptemos las medidas que corresponden y fundamentalmente mantenernos siempre a la ofensiva. No transar ni conciliar con el enemigo interno ni externo. Tenemos absoluta conciencia de que en este proceso no sólo está en juego el destino del pueblo chileno, sino también, en gran medida, el porvenir de los pueblos latinoamericanos. La presencia de un segundo territorio libre en América, junto a Cuba, junto a los movimientos revolucionarios de liberación nacional, junto a los movimientos progresistas militares de otros países del continente, junto al inmenso contingente de cristianos jóvenes comprometidos con la revolución, hacen perfectamente posible cumplir la tarea histórica en que estamos empeñados. Las fuerzas reaccionarias se han debilitado frente a la actitud cada vez más resuelta de las vanguardias revolucionarias de la clase obrera y de la juventud latinoamericana y frente a los movimientos armados existentes en diferentes naciones del continente. No es hoy el imperialismo el mismo que ayer estuvo en condiciones de exigir la expulsión de Cuba de la OEA, desatando el boicot económico y la agresión militar. Su derrota inevitable en la guerra de Vietnam, su transacción frente a China Popular, lo debilitarán cada vez más.

Por todo esto, es más necesario que nunca emprender una política resuelta y decidida que no rehuya el enfrentamiento con los tradicionales enemigos: la reacción interna y el imperialismo.

NUESTRA POLITICA FRENTE A LOS ESTADOS UNIDOS

La política internacional del Gobierno Popular ha sido correcta, y por primera vez en nuestra historia hemos rei-

vindicado para Chile el derecho soberano a dirigir nuestras relaciones internacionales. Como ya lo expresamos en tal virtud, restablecimos relaciones con Cuba y con los demás países socialistas del mundo. Especialmente justa ha sido la política en relación con los países limítrofes, y hoy, pese a todas las siniestras profesías de la reacción, las relaciones con Argentina, Perú y Bolivia se desarrollan en un plano altamente positivo, al igual que con el resto de las Repúblicas que conforman el Pacto Andino.

Sin embargo, creemos que la política frente a Estados Unidos admite rectificaciones de cierta importancia. En términos generales, nuestras relaciones con Norteamérica se han mantenido en un nivel aceptable, a pesar de sus actitudes provocadoras, puestas de manifiesto en diversas circunstancias. La nacionalización del cobre necesariamente ha de resentir estas relaciones. Por esta causa, Chile debe prepararse para enfrentar posibles medidas de boicot económico y financiero. Para ello deberá elaborar toda una estrategia que nos conduzca paulatinamente a romper la dependencia que aún existe del imperialismo, será necesario desviar nuestros abastecimientos hacia países que perteneciendo al mundo capitalista, no estén dispuestos a someterse a una política de agresión. Asimismo pensamos que debemos buscar fuentes de créditos fuera de los EE. UU., y de los organismos internacionales sometidos a su tutoría. En este sentido, es particularmente alentador el resultado de la gestión político-económica, iniciada por el Ministro de Relaciones Exteriores, compañero Almeyda, en los países socialistas, a la cual ya nos referimos.

Comprendemos perfectamente los peligros que entraña una política independiente del imperialismo. No estamos en una actitud provocadora. No es que queramos, por principio, buscar pretextos para una ruptura con EE. UU. Ni mucho menos. Pero tampoco podemos olvidar el largo historial de agresiones y de explotación del imperialismo yanqui en América latina. No podemos ignorar la conducta criminal y arbitraria asumida por EE. UU. frente a Cuba. La guerra inhumana que mantiene en contra del heroico pueblo de Vietnam. Nuestro país tiene el derecho soberano a gobernarse libre e independientemente. Ningún país puede

entrometerse en el manejo de nuestras relaciones internacionales y menos en la política interna. Estados Unidos lo ha hecho y es posible que pretenda continuar haciéndolo. Para ese caso debemos estar preparados, y nuestro Partido, así como el Gobierno de la Unidad Popular, está resuelto a hacer respetar el principio de la autodeterminación de los pueblos, sin vacilaciones de ningún orden.

NACIONALIZACION DEL COBRE

El Congreso Pleno por unanimidad, aprobó el proyecto de reforma constitucional enviado por el Ejecutivo, el cual permite nacionalizar la Gran Minería del Cobre y la Compañía Andina. Este proyecto, tal cual fue despachado por el Congreso, contiene vicios y errores que hacían aconsejable usar la facultad del veto; sin embargo, las demás colectividades integrantes de la UP, no fueron partidarias de nuestro planteamiento. El proyecto fue en definitiva promulgado y publicado, tal cual lo despachó el Congreso Pleno. Nosotros pensamos que sus disposiciones deben aplicarse con la máxima severidad. Durante cincuenta años hemos sufrido la explotación y el saqueo de nuestras riquezas fundamentales. Los monopolios norteamericanos, con sólo una inversión inicial de tres y medio millones de dólares, se han llevado del país sobre ocho millones de dólares. La sola utilidad de los últimos cuatro años es igual al valor de libros de estas Empresas. De acuerdo con la reforma constitucional aprobada, la indemnización la determinará el Contralor General de la República, según sea el valor de libros, el cual para el conjunto de las empresas alcanza aproximadamente a 550 millones de dólares. De este valor pueden deducirse diversas cantidades por diferentes capítulos. La principal deducción es la derivada de la rentabilidad excesiva. El Presidente de la República está facultado para determinar qué porcentaje de las utilidades es considerado "rentabilidad excesiva". Según sea este porcentaje, la Anaconda y la Kennecott tendrán o no derecho a ser indemnizadas e incluso es posible que deban restituir los valores apreciables. Sin pretender interferir en la facultad del Jefe del Estado para fijar la rentabilidad excesiva, y

reconociendo el derecho a apelar que tienen, tanto las empresas norteamericanas, como el Estado chileno, ante un Tribunal Especial, nuestro Partido piensa que estos dos grandes consorcios monopolistas no deben recibir indemnizaciones de ningún orden.

Tal resolución no obedece a una actitud de venganza en contra de los empresarios norteamericanos. Ella tiene su fundamento en las facultades soberanas, otorgadas por el Congreso Pleno en forma unánime, al Presidente de la República y al mecanismo de indemnización previsto en la misma Reforma Constitucional. Sólo ejercitamos un derecho inalienable, aprobado por todos los partidos políticos chilenos.

Además hay que considerar que los convenios del cobre, concluidos por el señor Frei, endeudaron a estas empresas, o sea al país, en 650 millones de dólares. El monto de este endeudamiento no se justifica. Según el señor Frei, en su discurso pronunciado el 21 de diciembre de 1964, al término de su administración el país tendría una producción de cobre superior al millón de toneladas, en circunstancias que sólo alcanzó a 586 mil toneladas, estos es 420 mil toneladas menos que lo previsto. En otras palabras, las empresas han tenido utilidades gigantescas en estos últimos años, debido al alto precio del cobre y a los beneficios de todo orden que se les concedieron. En cambio, Chile no aumentó su producción y, a mayor abundamiento, adeuda más de 650 millones de dólares. Esto se debe a que las inversiones fueron mal concebidas y mal ejecutadas. Los informes técnicos, de ingenieros chilenos; de la Société Française de Mines; de la Misión Soviética; de la Misión de la R.D.A., dan testimonio elocuente de ello. El hecho de hacernos cargo de esta deuda importaría una carga demasiado grande para el país, la cual se vería dramáticamente agravada por el hecho de pagar indemnizaciones a nuestros explotadores. Además hay que considerar que los abogados norteamericanos que confeccionaron los convenios celebrados por el gobierno de Frei con la Anaconda, la Kennecott, y la Cerro Pasco Corporation, no sólo introdujeron cláusulas denigrantes para nuestro país, sino que algunas de ellas someten a la jurisdicción de tribunales norteamericanos los

posibles conflictos. No cabe la menor duda que los empresarios norteamericanos pretenden hacer valer sus derechos ante esos tribunales extranjeros. Pero nuestra decisión es única e irrevocable: en virtud de un derecho soberano e inalienable, reconocido por todos los países, incluso las Naciones Unidas, Chile nacionalizará la Gran Minería del Cobre ejercitando facultades constitucionales, acordadas por un Congreso en el cual ni siquiera somos mayoría. Si el Gobierno norteamericano pretendiera coartar nuestro derecho y conculcar las disposiciones constitucionales, deberemos responder con la mayor energía, cualesquiera sean los riesgos que resulten de esta actitud digna, patriótica y soberana. Por último, debemos agregar que las empresas norteamericanas se han negado a pagar los dividendos que corresponden al Estado Chileno, además de haber incurrido en una serie de fraudes tributarios y aduaneros.

Por esto la posición del Partido es una posición de principios y en consecuencia, inamovible.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

Como ya lo hemos dicho, el aparato del Estado permanece intacto en su estructura democrático-burguesa. Por esto es fundamental presentar los proyectos de reforma constitucional antes aludidos y realizar en torno a ellos toda una política de enjuiciamiento de los actuales mecanismos jurídicos y de la institucionalidad de clase vigente. Los proyectos son como se ha dicho: el que faculta al Presidente de la República para disolver el Congreso Nacional; el que crea la Cámara Única; el que permite celebrar pactos electorales con fuerzas políticas afines; el que entrega instrumentos legales para liquidar la estructura monopólica y la presencia de poderosas empresas que distorsionan la producción, distribución y consumo de artículos esenciales, y por último, el que establece con rango constitucional la participación viva y creadora de los trabajadores y de todas las organizaciones de masa en la gestión del gobierno y en el área reformada agrícola y en el sector social de la economía.

A nuestro juicio, no se proyectó debidamente la gran vic-

toría que obtuvieron los partidos populares en la elección municipal. Inmediatamente después de este triunfo debieron presentarse los proyectos aludidos. Lamentablemente no se hizo así, pero no es tarde aún. Las masas comprenden perfectamente que es necesario modificar la estructura productiva capitalista. Sin transformaciones radicales no será posible, por mucho que se planifique la acción del Estado, que se amplíe el área social, que se dé participación a los trabajadores, aumentar notoriamente la productividad, y en consecuencia, elevar el nivel de vida de los chilenos. El subdesarrollo en que nos debatimos es consecuencia del sistema capitalista y dependiente; mientras él no sea modificado, no existe posibilidad real de un salto cualitativo en las relaciones de producción, y en el standard de vida de los chilenos. Por esto hemos insistido en el gran objetivo estratégico: ganar todo el poder para los trabajadores, para a su vez, cambiar la estructura de la sociedad. Para ello es necesario contar con los mecanismos legales necesarios.

Sabemos que estas proposiciones son violentamente combatidas por los reaccionarios. El diario "El Mercurio", el portavoz más inteligente de la reacción chilena y del imperialismo norteamericano, ha venido editorializando tenazmente en contra de estas iniciativas. Ellos saben el alcance y significado que tendría para la clase trabajadora el que en el Parlamento Nacional o Cámara Unica se expresara fielmente la actual correlación de fuerzas políticas. El Partido Socialista está dispuesto a impulsar sin vacilaciones el Programa Revolucionario prometido al pueblo. La derecha sediciosa pretenderá oponerse a estas iniciativas. Insistirá en que ellas arrastrarían al país al establecimiento de un régimen totalitario. Nada más falso, puesto que tales iniciativas serían —de aprobarse— el resultado de la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada en las urnas.

De otra parte, la sedición reaccionaria tendrá que tener en cuenta que Salvador Allende no es Belaúnde Terry; ni las fuerzas populares se encuentran en el nivel de desarrollo político y de conciencia revolucionaria en que estaban las de Brasil en la época de Goulart; ni menos confundir a nuestras Fuerzas Armadas con las de otros países.

Ya una vez en la historia las fuerzas reaccionarias hicieron prevalecer en los sangrientos campos de Concón y Placilla, el interés extranjero sobre el interés nacional; y arrastraron al país a un largo y tumultuoso periodo de caos y anarquía parlamentarista. Esta vez no será igual. En Chile ha madurado una conciencia nacional y revolucionaria. La conciencia nacional impedirá que prevalezca el interés extranjero sobre los intereses de Chile; y la conciencia revolucionaria hará imposible una restauración reaccionaria.

POLITICA ECONOMICA

Defendamos la actual política económica, pero en el entendido que ella debe conducir cuanto antes a una más acelerada ampliación del área social y que debe ser hecha planificadamente, no en forma desordenada, ni menos de acuerdo a la presión de intereses empresariales ni de sectores aislados de trabajadores. Además tal política desordenada e inorgánica crea intranquilidad en amplios sectores que nada deben temer del Gobierno, por el contrario, deben ser amparados. Igualmente compartimos el criterio de mantener estabilizado el dólar del mercado bancario, pero también bajo el supuesto irrenunciable de que este criterio se fundamenta en la necesidad de marchar rápidamente a la estatización del comercio exterior. El valor del dólar no tiene por qué ser un símbolo que preside gran parte de las decisiones económicas de diferentes sectores de la economía nacional e incluso de la mayoría de la población. El Gobierno deberá adquirir los productos de exportación en moneda nacional y un precio que le permita competir en el mercado exterior. Al mismo tiempo las importaciones se harán de acuerdo con su prioridad y su precio en escudos se determinará según el carácter que ellas tengan de artículos más o menos prescindibles, de consumo popular o relativamente suntuario. Será una tarea de la institución encargada del comercio exterior y de las autoridades monetarias compensar los desajustes producidos tanto en moneda extranjera, como en moneda nacional.

También estimamos indispensable establecer para el próximo año una política de reajuste de remuneraciones com-

patible con las posibilidades económicas, la clase trabajadora deberá entender que el Gobierno ya ha producido una redistribución del ingreso en forma importante, que ha elevado el poder adquisitivo de las masas; que piensa llevar adelante una política de precios discriminatoria favoreciendo a los sectores de más bajos ingresos que a través de la política de educación y de salud está mejorando los servicios. Pero todas estas medidas, destinadas a favorecer al pueblo, no pueden continuar aplicándose indefinidamente mientras no exista un aumento real de la capacidad productora del país.

Debemos cuanto antes establecer la organización definitiva de la banca socializada para planificar debidamente la distribución del crédito. Al respecto ya existe un proyecto elaborado por compañeros del partido, el cual sometemos a la consideración del Gobierno de la Unidad Popular. Tampoco hemos olvidado la urgencia que hay en elaborar el presupuesto en moneda nacional de acuerdo al nuevo criterio que informa la política económica del Gobierno.

En resumen, estamos perfectamente conscientes de que es necesario planificar la política de precios, de comercio exterior, de remuneraciones, de crédito y monetaria, de acuerdo a los objetivos políticos planteados en el programa de la Unidad Popular.

Por último, como objetivo importantísimo de esta política está el hacer conciencia en las masas acerca de las dificultades que enfrenta el Gobierno Popular en la ejecución del programa económico y financiero, no sólo por el sabotaje de los sectores reaccionarios, por la negativa a aumentar la producción en muchos casos, por la restricción de los créditos, por la situación deplorable en que se nos entrega la gran minería del cobre, sino también por las dificultades inherentes a todo proceso de cambios. El socialismo no se regala. El se conquista con esfuerzo y sacrificios. Hasta ahora hemos puesto el acento de nuestras intervenciones en lo que se ha dado y en lo que pueda darse, pero no lo hemos hecho suficientemente en las obligaciones y responsabilidades que contraen las vanguardias políticas, la clase trabajadora y el pueblo en general. Tenemos claro que el

ejemplo debe venir de arriba. Que es indispensable erradicar los vicios del burocratismo.

Cambiar la imagen de la administración pública, la cual continúa siendo en lo fundamental, igual a la de los gobiernos reaccionarios. Haremos un esfuerzo muy sincero por evitar el derroche en el gasto público, en la contratación de funcionarios innecesarios, en viajes inútiles, en viáticos exagerados, en el uso ligero de las granjerías que da el poder. En esta materia hay que ser inflexible. Jamás podrá exigirse sacrificio a la masa trabajadora si quienes pretendemos demostrar dirigir correctamente a la clase trabajadora, no damos el ejemplo de austeridad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones.

Finalmente, la batalla por la producción adquiere una relevancia especial. Situaciones como la huelga del mineral de El Salvador no son aceptables. Pondremos todo el peso de la dirección política del Partido en crear una conciencia para introducir mayor disciplina laboral, más responsabilidad en el trabajo, menos ausentismo. Comprendemos que estos objetivos no podrán lograrse de la noche a la mañana, y también sabemos que ellos jamás se obtendrán si el trabajador, obrero, campesino, minero o empleado no se siente realmente participe de este proceso revolucionario y actor esencial de él.

POLITICA AGRARIA

El Partido impulsa una reforma agraria rápida, drástica y masiva. A más tardar el próximo año deben estar expropiados todos los latifundios. Dentro de este contexto general los principios que informan nuestra posición en el agro chileno son: debemos llevar adelante una campaña para la constitución definitiva de los Consejos Comunales Campesinos.

Debemos hacer una campaña para obtener la constitución de centros de reforma agraria en el área reformada, aunque sea con carácter transitorio. Efectuar una campaña para sanear los asentamientos. Debemos llevar adelante una campaña para organizar a los pequeños propietarios agrícolas en cooperativas avanzadas de producción, una

campana para integrar a nivel comunal a los funcionarios del agro.

Los Consejos Comunales Campesinos, deberán ser elegidos en la forma ya acordada, con los demás partidos de la UP, y deberán entregarles funciones ejecutivas reales y no meramente asesoras.

En la constitución de los centros de reforma agraria debe incorporarse también a la mujer y a sus familiares mayores de 16 años. Toda esta participación del campesino en el proceso del Agro y en la explotación de los centros de reforma agraria es decisiva. Si queremos efectuar una auténtica reforma en el campo chileno, la participación y la dirección ejecutiva de los campesinos en sus respectivos niveles, es imprescindible. Sólo así podremos asegurar metas de producción, limitar los anhelos de pequeños sectores por exigir la inmediata asignación de tierra, estimular la creación de fondos de capitalización y desarrollo, y por último, evitar la toma indiscriminada de predios.

De más está decir que jamás hemos planteado la reducción de la cabida básica a 20 hectáreas, pero también debemos dejar claramente establecido nuestro pensamiento en orden que legal, económica y políticamente, no corresponde otorgar una reserva de 80 hectáreas de riego básico, porque ello permite mantener un enclave de tipo latifundiarío en el agro.

No me extenderé mayormente sobre esta materia, porque existen numerosos documentos que han precisado nuestra política.

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Ya hemos hecho referencia a la importancia que tiene este tema en toda la política del Gobierno Popular. En una palabra podríamos decir que para nosotros, los socialistas, no hay revolución si el pueblo trabajador, si las masas no se incorporan efectivamente en calidad de autores al proceso. Este es el Gobierno de los trabajadores. Fueron ellos los gestores del triunfo y ellos son los pilares de su actuación. Pero no basta aceptar esta afirmación en forma teórica: es menester darle concreción en los hechos.

Algo se ha avanzado en este terreno: la creación de los Consejos Campesinos; la designación de representantes de los trabajadores en las empresas incorporadas al área social; la presencia de los empleados en la administración de los bancos estatizados; los numerosos cargos públicos, desde Ministros de Estado hasta directores y gerentes de organismos públicos, son una demostración de ello. También se ha elaborado un proyecto de ley destinado a darle participación a los trabajadores, tanto en las empresas del área social, como en el sector privado.

Finalmente, nosotros somos partidarios de elevar a la categoría de principio constitucional la participación de los trabajadores en toda la gestión de la vida colectiva de la nación.

Debemos si reconocer que hasta el momento no ha habido definición concreta sobre la participación de los trabajadores en el proceso revolucionario. Su incorporación individual en determinados cargos públicos o empresas del área socializada hecha, más que por su condición de clase, por su representatividad política, no refleja una efectiva y real integración a la conducción económica y social del país.

Esta razón explica la conducta en apariencia inconsecuente de ciertos sectores de trabajadores fabriles, mineros y del campo. No disponen de mecanismos reales de participación, ni menos se sienten solidarios de una política que no han contribuido a elaborar cualquiera sea el nivel en que actúan. Por esto hay que dar la batalla por la producción. Pero para que esta batalla tenga éxito es condición sine qua non que el trabajador se sienta actor y protagonista del proceso revolucionario tanto en lo general, como en las decisiones concretas adoptadas en su esfera de acción inmediata. El trabajador debe sentir que no sólo se le está pidiendo más responsabilidad y más trabajo, sino que también hay que resolver sus problemas reivindicativos más urgentes, sin perjuicio de la lucha contra el economicismo y el oportunismo sindical. Es imprescindible hacer participar de hecho a obreros y campesinos en las diferentes tareas propias de la empresa en que laboran sin perjuicio de legalizar cuanto antes su incorporación a todos los organismos

del Estado. Esta participación es vital para dinamizar la acción de las masas, de manera que ellas sientan que este Gobierno es su Gobierno. Además, esta participación no sólo debe tender a incorporar al obrero del campo, de la ciudad o de la mina, sino al pueblo todo en Juntas de Vecinos, en Centros de Madres, en organismos previsionales, en las áreas de salud, en los establecimientos educacionales, en las Municipalidades, en el control del abastecimiento y de los precios, en la vigilancia contra la sedición y el sabotaje reaccionario. En síntesis, hay que buscar formas directas y originales de participación, de modo que las masas se sientan autoras y no meros testigos del proceso revolucionario.

MORAL REVOLUCIONARIA

También preocupa a la dirección de nuestro partido el hecho de que no se ha logrado crear aún una mentalidad básicamente diferente en los militantes de partidos, en la administración pública y en los dirigentes sindicales. Sin una gran mística; sin conciencia de lo que significa llevar a cabo un proceso revolucionario; de los inmensos sacrificios que él importa, falta un elemento imprescindible en todo curso revolucionario. Pero también debemos tener muy claro que para crear esta conciencia, esta mística y esta fe en la construcción de una nueva sociedad, esta responsabilidad en el trabajo, se necesitan grandes objetivos motivadores y movilizadores de la conducta colectiva. No podemos pretender conducir a las masas a la lucha si no tienen en claro por qué luchan y para qué luchan. Las masas necesitan conocer a sus enemigos. Necesitan saber quiénes son los que se oponen al proceso revolucionario; quiénes obstruyen las medidas destinadas a mejorar la condición de vida de nuestro país y de nuestro pueblo. Una política conciliadora basada en transacciones, desmoviliza a las masas, las desorienta y las confunde. Por el contrario, una política que las lleve a enfrentarse con sus enemigos, que haga conciencia de las dificultades de este enfrentamiento; pero que al mismo tiempo señale con claridad las grandes metas a lograr, si que logrará comprometerlas en el pro-

ceso de cambio y las hará aportar su abnegación, esfuerzo e iniciativa creadora a él. Toda esta nueva conducta conformará una nueva moral revolucionaria.

EL PARTIDO SOCIALISTA

Hace seis meses asumimos la dirección del socialismo chileno. La tarea que nos ha correspondido realizar ha sido simplemente gigantesca. Todos saben muy bien que la organización de nuestro Partido no era, ni es la mejor; sin embargo, con esta organización hemos debido enfrentar obligaciones muy superiores a las que hayan pesado sobre cualquiera otra dirección, puesto que somos Partido de Gobierno y constituimos la principal fuerza de apoyo a él. Estas circunstancias nos han obligado a quintuplicar nuestro esfuerzo. Jamás nunca una dirección ha tenido tantas responsabilidades ni ha tenido que responder a tan inmenso cúmulo de problemas tanto del Partido, como del Gobierno. Lo anterior nos ha conducido a cometer errores que nos adelantamos a reconocer. No se ha atendido como corresponde a los compañeros militantes y dirigentes de Santiago y de provincia en sus múltiples peticiones; no ha existido una mayor comunicación satisfactoria de la dirección del Partido con la base. Más de alguna vez hubo sectarismos en las decisiones adoptadas. No ha sido posible cautelar como hubiéramos deseado la presencia del Partido en los diferentes niveles de la administración pública. Todo esto es cierto. Pero también vaya como explicación el número inmenso de tareas que han gravitado sobre la dirección en su conjunto y sobre cada una de las Subsecretarías y Departamentos del Partido. Además los comités regionales tampoco han logrado funcionar como deseáramos, lo que ha recargado el trabajo del Comité Central.

TAREAS FUNDAMENTALES QUE HEMOS DEBIDO RESOLVER

Casi inmediatamente de elegida esta dirección debimos destinar ingentes recursos económicos y humanos para enfrentar la elección municipal de abril. Felizmente el resul-

tado fue óptimo. Obtuvimos el 23% de los votos. Paralelamente, tuvimos que impulsar la candidatura del compañero Adonis Sepúlveda en la Décima Circunscripción. También el resultado electoral nos fue ampliamente favorable. Prácticamente desde fines de junio debimos destinar los mejores cuadros directivos e importantes recursos económicos para sostener la candidatura a diputado del compañero Hernán del Canto. A pesar de haber tenido que enfrentar estos procesos electorales que han consumido gran parte de la energía del Partido en estos seis meses, la dirección ha efectuado numerosos plenos regionales y nacionales. En abril pasado ya celebramos un pleno nacional de dirigentes y hoy, en agosto, tenemos un segundo Pleno Nacional. El Comité Central ha tenido cuatro Plenos, en febrero, abril, mayo y agosto. La Comisión Política entre febrero y agosto ha realizado 51 sesiones, todas ellas de varias horas de duración, destinadas a dar respuesta a los problemas orgánicos del Partido y a las innumerables cuestiones propias del Gobierno. Todas estas materias exigen un estudio exhaustivo, además las circunstancias son extraordinariamente cambiantes, de manera que los acuerdos adoptados en relación a una determinada política económica, agraria, de precios, de vivienda, de reajustes, internacional, del cobre, etc., etc., deben sufrir modificaciones permanentes, adecuándoselas a las nuevas condiciones. Por vía de ejemplo menciono los acuerdos que hemos debido adoptar sólo en las últimas horas, en relación con la huelga de El Salvador, con la huelga de los supervisores en Chuquicamata, con los acontecimientos ocurridos en Rancagua a raíz del asesinato de un agricultor, con la actitud de indisciplina del diputado Jáuregui y esto sin considerar las reuniones con el Presidente de la República en Viña del Mar todo el día sábado y todo el día domingo, para analizar la situación económica del país y el panorama político. La reunión celebrada con el Jefe del Estado, el lunes desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada, para decidir sobre la nueva organización del Departamento del Cobre y de la industria cuprífera y de las personas que deberán asumir responsabilidades en esta área. De la reunión efectuada el día martes desde las ocho de la

noche hasta las doce de ese mismo día con la brigada parlamentaria y el compañero Presidente para resolver problemas de diverso orden.

Por estas razones los logros obtenidos no son aun mayores y digo no son aun mayores, porque pueden exhibirse resultados considerables en las Subsecretarías y en los Departamentos, de los cuales dan constancia los diferentes informes específicos. Sólo mencionaré los más importantes: la tarea de refichaje llevada a cabo por el Departamento de Organización es esencial para que, de una vez y para siempre, conozcamos cuál es la realidad de nuestro Partido, el carácter de su militancia, sus latitudes, edad, sexo, etc. Por primera vez en 25 años se celebró una conferencia sindical, la cual ha arrojado resultados positivos. También se ha celebrado un pleno nacional del Frente Interno y una conferencia de vivienda. El Partido ha conseguido organizar una agencia publicitaria de cierta envergadura.

Hemos adquirido tres radios importantes. Antes de 15 días el Partido tendrá por fin su propio periódico y antes de un mes podremos contar con un local adecuado para trabajar. Actualmente la Juventud edita una revista que se llama "Indoamérica" y el Departamento Sindical otra, que se llama "Trinchera Socialista". Hemos convocado a tres grandes actos públicos en el Teatro Caupolicán para dar a conocer nuestras posiciones.

Como puede apreciarse, toda esta tarea realizada en el plano gubernativo, organizativo, electoral, internacional, de adquisición de nuevos medios de comunicación, de organización de un Departamento de Informaciones y Seguridad, ha debido hacerse sin disponer aún de los recursos económicos, de las condiciones materiales y de los equipos humanos suficientes. Pensamos, sin exagerado optimismo, que en el futuro podremos ir resolviendo estos problemas en forma satisfactoria. Es evidente que necesitamos del trabajo solidario y de la colaboración generosa de todos. No pueden sólo algunos compañeros, tanto del Comité Central, como en los Comités Regionales y Seccionales, llevar todo el peso de las tareas.

Nos correspondió conjuntamente con el compañero Subsecretario del Frente de Masas, Rolando Calderón y el com-

pañero Belarmino Elgueta, miembro de la Comisión Política, aceptar la invitación por el Partido Comunista de Cuba, de la Unión Soviética y de la República Popular de Corea. La acogida con que fuimos recibidos en estos tres países socialistas supera cualquier ponderación. Tanto en Cuba como en la Unión Soviética y Corea, fuimos recibidos por los más altos dirigentes políticos. En Cuba conversamos largas horas con el compañero Fidel Castro. Igual sucedió en la Unión Soviética, donde el compañero Breshnev nos dio una audiencia de más de cinco horas. Por último, el compañero Kim-Il-Sung, además de enviarnos a buscar en su avión particular, también nos dispensó la mayor atención. Las conversaciones y los correspondientes acuerdos han sido de una gran importancia para nuestro Partido. En términos generales, la visita a estas naciones socialistas, revela la inmensa importancia que ha adquirido el Partido en todo el mundo socialista, y el valor que esos pueblos conceden al proceso revolucionario chileno y al gobierno de Salvador Allende. Debido a que tuvimos que retornar precipitadamente a raíz del asesinato de Pérez Zujovic, no pudimos aceptar las reiteradas invitaciones a China Popular y a Vietnam. También cumplieron cometidos similares las delegaciones de nuestro Partido enviadas al Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, integrada por Hernán del Canto y Jorge Mac-Ginty, y a la República Democrática Alemana y Rumania, integrada por Alejandro Jiliberto y Erich Schnake. También ellos fueron recibidos en el mismo alto nivel político y las conversaciones celebradas traerán un positivo beneficio para el Partido y para el movimiento popular.

Tareas Inmediatas

Por el momento la gran tarea a que estamos abocados —que fue la señalada en el Pleno pasado—, es organizar nuestro Partido y educar políticamente mejor a nuestros militantes. Además, como ya lo he dicho, es objetivo inmediato sacar un periódico para mantener así una verdadera comunicación con la masa, con las bases del Partido y para que sean debidamente conocidas nuestras posiciones. Igualmente pen-

samos que es indispensable adquirir un nuevo local donde podamos funcionar en condiciones de mayor seguridad y eficiencia. Por último, tenemos la gran tarea de trabajar más y mejor por el éxito del Congreso de la Central Unica de Trabajadores.

Unidad del Partido

Desde hace algunos meses se viene desatando toda una intensa campaña publicitaria reaccionaria en contra nuestra. Todos los días, la prensa reaccionaria, las radios reaccionarias, los comentaristas reaccionarios, siembran la cizaña dentro y en contra del Partido Socialista. Esto es lógico. La derecha quiere dividirnos. Debilitar al Partido Socialista es talvez uno de sus principales objetivos tácticos. Somos la fuerza mayoritaria del Gobierno de la Unidad Popular y hoy, no cabe duda, después de la división de la Democracia Cristiana, somos la primera fuerza política del país. Dividirnos, arrastrarnos a querellas intestinas, crear la imagen de un partido fraccionalizado es su objetivo más importante. Lamentablemente, las declaraciones públicas y las actitudes de algunos militantes del Partido, que pienso han sido honestas y sinceras, han hecho el juego al enemigo y a los reaccionarios. Por eso debemos observar el máximo cuidado en cualquier tipo de declaración, en cualquier opinión que se emita sobre el Partido o sobre algunos militantes, dirigentes o mandatarios. Como he dicho, hemos pasado a ser la primera fuerza política y por esta misma razón hemos pasado a ser el primer enemigo de la reacción y del imperialismo. Por otra parte, también debemos reconocer se efectúa por algunos militantes una campaña solapada en contra de la dirección del Partido, sin reparar que al restarle legitimidad a esta dirección, elegida por abrumadora mayoría en el Congreso de La Serena, se está dañando irreparablemente al Partido mismo, al movimiento popular y al Gobierno de Salvador Allende. No queremos con esta afirmación coartar el derecho democrático de nadie a la crítica.

No somos infalibles. Hemos cometido errores, como ya lo reconocí. Se han adoptado actitudes sectarias frente a al-

gunos compañeros, pero estos hechos relativamente excepcionales no pueden servir de fundamento a una impugnación de la dirección del Partido en su conjunto, aún más, hoy más que nunca es necesaria la crítica, pero una crítica constructiva destinada a mejorar la fraternidad interna del socialismo, la unidad del Partido y nuestra acción dentro del gobierno. Esta crítica será siempre bien recibida. No pensamos ni deseamos en constituirnos en una dirección ensimismada, carente de vínculos con la base del Partido y premunida del fuero para no ser enjuiciada.

Pero las observaciones, las críticas, los juicios que se emiten deben ser hechos dentro del Partido, con ánimo constructivo, de buena fe, de lo contrario, ella sirve a los reaccionarios, a los imperialistas, a los antipartido.

Una vez más reafirmamos lo que ya hemos dicho en cada reunión plenaria, nacional o regional anterior. No dividamos el Partido entre viejos y jóvenes, entre revolucionarios y socialdemócratas, entre varones y mujeres. No es la edad ni el sexo, ni las calificaciones ligeras lo que define una conducta socialista consecuente y ayuda a fortalecer la unidad y solidaridad del Partido. Si alguien, por ligereza, se ajustara a estos patrones, a estos patrones de juicio, estamos en contra de ellos y los sancionaremos en la misma medida que se comprueben sus actitudes o expresiones. También condenamos en forma categórica y definitiva la doble militancia. Ya lo dijimos en el primer Pleno Nacional de Dirigentes, realizado en abril pasado. En este Partido sólo tienen cabida los socialistas. Pero tampoco aceptaremos se hagan imputaciones ligeras y falsas que ponen en tela de juicio la honestidad política y moral de diversos militantes del Partido. Cada cargo debe ser probado.

Compañeros del Pleno Nacional del Partido Socialista:

Tenemos conciencia del momento estelar por el cual transita nuestra nación. Momento único en su historia, tal vez sólo comparable a los gloriosos días de la gesta emancipadora del año 1810, y por esto mismo, porque estamos conscientes de esta responsabilidad histórica sin igual es porque pospondremos cualquier vanidad personal, cualquier

legítima ambición en aras de la unidad del socialismo, de la revolución chilena, de la revolución continental.

Permitirme antes de concluir, una pequeña digresión de carácter personal. Jamás he tenido problemas con ningún compañero del Partido porque haya querido aspirar a cargos de representación, dentro o fuera del Partido. Todo lo contrario, he recibido críticas de estimados camaradas y amigos por negarme precisamente a aceptar cargos o candidaturas a cargos, entre otras, la propia candidatura presidencial dentro del Partido. Por esto estimo tener autoridad moral para ser creído. Sólo me guía en la alta responsabilidad que desempeño, por la voluntad mayoritaria del Congreso de La Serena, el deseo de servir al Partido Socialista, de cautelar su unidad, de fortalecer la solidaridad interna, de aumentar la fraternidad entre cada compañero. No estoy aquí para avivar odios ni resentimientos, y honestamente abrigo la íntima convicción de que es éste el pensamiento que anima a la totalidad de los miembros del Comité Central y de la Comisión Política. Mi nombre no será jamás motivo de discordia dentro del Partido. Mi mayor orgullo es participar en este proceso, único en nuestra historia, y en el cual tienen puesta su atención todos los pueblos de la tierra, especialmente los pueblos latinoamericanos. Invito en nombre de la dirección máxima del socialismo a todos los compañeros dirigentes aquí presentes y a los mandatarios a trabajar con el máximo desinterés. Estoy absolutamente seguro de que no hay diferencias políticas sustanciales entre nosotros. Que todos queramos el bien de Chile, del Partido y de la Revolución. Las pequeñas discrepancias subalternas no pueden desempeñar una acción conjunta y solidaria. Las rencillas mezquinas no podrán jamás prevalecer sobre la relación fraterna y amistosa que existe entre la inmensa mayoría de nosotros, y si con algunos hubo discrepancias personales, que ellas sean olvidadas en aras de la superior tarea que recae en nosotros. No olvidemos, compañeros del Partido, que de las decisiones que ahora adoptemos, viejos o jóvenes, hombres o mujeres, dirigentes del pasado o del presente, depende el futuro de la revolución chilena, depende el porvenir de la clase trabajadora y en cierta medida el desarrollo progresivo

del proceso revolucionario continental. Jamás se nos perdonaría que por diferencias subalternas o actitudes equivocadas, mañana se malograra la tarea más grande y más trascendental que ha tenido nuestro Partido, la de ser vanguardia y conductor del proceso revolucionario chileno.

ALGARROBO, 14 de agosto de 1971.

